

# Maduro planea «resistencia prolongada» y EEUU evalúa objetivos, dice prensa internacional

Venezuela ha elaborado planes que describen una respuesta de estilo guerrillero –denominada internamente «resistencia prolongada»– y una segunda vía clandestina que busca sembrar el desorden urbano para dificultar la acción de una fuerza extranjera, según fuentes y documentos de planificación consultados por Reuters. Esos papeles, que se han preparado desde hace varios años, contemplan despliegues de pequeñas unidades en más de 280 puntos del territorio para realizar sabotajes y acciones de hostigamiento, mientras que la llamada «anarquización» recurriría a servicios de inteligencia y a militantes armados del partido oficial para generar caos en ciudades como Caracas.

Este lunes, Nicolás Maduro afirmó que el chavismo responderá con una «huelga general insurreccional» en caso de que Estados Unidos emprenda una acción militar contra su gobierno, afirmando que los trabajadores paralizarán las actividades productivas del país «hasta que el chavismo sea retornado al poder». «Desde el mismo momento se decretará la orden de operaciones de movilización y combate de todo el pueblo (...) y la clase obrera venezolana iniciará una huelga general insurreccional», afirmó.

Hace un mes, el ministro de Cultura Ernesto Villegas dijo en Madrid que «si Estados Unidos persiste en su intención de entrar en Venezuela, se va a encontrar aquí con una sorpresa inesperada. Esto será peor que otro Vietnam para los norteamericanos, que están sembrando una rastra de mentiras para justificar esa intervención». Ya en 2019, el propio Maduro decía, cuando Donald Trump gobernaba por primera vez en la Casa Blanca, que «si Estados Unidos pretende intervenirnos tendrán un Vietnam peor del que se han podido imaginar».

Las limitaciones de la Fuerza Armada –salarios bajos, escasez de suministros y equipos con décadas de antigüedad– explican en buena medida por qué la administración de Nicolás Maduro ha optado por preparar tácticas irregulares en vez de una defensa convencional, señalan militares y analistas citados por Reuters. Un balance crítico en esas fuentes admite que, frente al poderío militar estadounidense, Venezuela «no resistiría dos horas en

una guerra convencional», y que esas medidas buscan técnicamente aumentar el costo político y operativo de una intervención más que garantizar una victoria militar.

En Washington, según reportajes que examinan las deliberaciones internas de la Casa Blanca, el debate se centra en una gama de opciones que van desde ataques aéreos sobre instalaciones militares y supuestos centros de narcotráfico hasta misiones especiales para capturar o neutralizar a altos mandos, incluido el propio presidente Maduro. The New York Times y The Washington Post describen cómo asesores cercanos al presidente presionan por alternativas agresivas –entre ellas la toma de campos petroleros o golpes quirúrgicos contra unidades que protegen al mandatario– mientras la presidencia muestra reticencias por los riesgos para las tropas y las implicaciones legales y políticas.

Esas propuestas incluyen, según las crónicas, tres tipos de planes: 1) ataques aéreos selectivos para degradar la capacidad militar que protege a la cúpula; 2) operaciones de fuerzas especiales para capturar objetivos de alto valor; y 3) operaciones más complejas para asegurar aeródromos y áreas petroleras estratégicas. The New York Times advierte que, además de los riesgos tácticos, hay un vacío jurídico que el Departamento de Justicia intenta llenar para justificar técnicamente acciones más allá de las que actualmente se han librado en el mar contra embarcaciones sospechosas.

La convergencia entre la estrategia venezolana de maximizar el costo de una intervención mediante tácticas irregulares y la gama de opciones estadounidenses plantea un escenario de alto riesgo para civiles y para la estabilidad regional. Analistas consultados por las agencias recuerdan que una operación dirigida a desplazar o capturar a dirigentes implica enfrentamientos urbanos, posibles daños a infraestructura crítica –incluidos campos petroleros– y consecuencias imprevisibles en la seguridad interna, con grupos armados que podrían aprovechar la violencia para expandir su control. The Washington Post subraya, además, que la concentración pública de fuerzas (por ejemplo, el desplazamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia el Caribe) cumple una función de presión psicológica además de una utilidad operativa.

Desde Caracas, la administración de Nicolás Maduro ha intentado convertir la movilización y la exhibición de material bélico en un mensaje disuasorio: mostrar capacidad de resistencia y la posibilidad de que armamento y milicias no controladas originen una espiral de violencia tras una intervención. Observadores

críticos señalan que esa retórica busca disuadir, pero que a la vez añade una capa de riesgo al sugerir que, en caso de agresión, el país podría sumergirse en una fase prolongada de fragmentación y violencia, con efectos duraderos sobre la gobernabilidad.

Con información de TalCual